

MESIANISMO AUTOCRÁTICO

Desde 1930, la historia política argentina estuvo marcada por una creciente presencia militar y por el uso consistente de la violencia para imponer desde el poder del Estado lo que no se podía consensuar desde la política. La incapacidad de los sectores económicamente dominantes para establecer una verdadera hegemonía, es decir, para constituirse como grupo dirigente, los llevó a apoyarse en la fuerza de las instituciones armadas para imponer su dominio. Mediante la fuerza militar se expulsó al radicalismo, se mantuvo el fraude “patriótico” de la Década Infame y se canceló cualquier gobierno que resultara “amenazante” o inconveniente. El uso de la violencia como instrumento político de los grupos de poder se profundizó a partir de 1955, con la expulsión y proscripción del peronismo –populismo autoritario es cierto–, pero surgido de las urnas y sostenido por un apoyo popular incuestionable. No obstante, las fuerzas “democráticas”, que lo acusaban de demagógico y dictatorial, rehusaron el veredicto electoral, y cifraron sus esperanzas en la intervención militar. El

golpe militar de 1955, instigado y aplaudido por todos los partidos políticos (radicales, conservadores, comunistas y socialistas) con excepción del propio peronismo, recurrió a niveles de violencia sin precedentes y reforzó la “aceptabilidad” del recurso de la fuerza en la práctica política. El bombardeo de la Plaza de Mayo, repleta de civiles antes del golpe, y los fusilamientos de José León Suárez contra peronistas –que intentaban su propio golpe de Estado–, después, marcaron nuevos rangos de la violencia política. La proscripción del peronismo fue algo más que su exclusión electoral y comprendió un verdadero proceso de desaparición: el secuestro del cadáver de Evita, la prohibición de toda mención al nombre de Perón, la exclusión de la simple palabra “peronista”, que se estableció en octubre del mismo año del golpe, todo tendía a sugerir que el poder podría *desaparecer por decreto* aquello que no podía controlar. El uso de una violencia inusitada y el desconocimiento liso y llano de un grupo ostensiblemente mayoritario favorecieron una visión binaria, ya añeja, que se expresó ahora bajo la supuesta antinomia entre peronistas y antiperonistas.

Aun con la proscripción política y represiva del peronismo, los gobiernos civiles surgidos de procesos electorales resultaron incapaces de organizar un proyecto que hegemonizara a la sociedad, de manera que las presidencias radicales de Arturo Frondizi y Arturo Illia concluyeron en sendos golpes militares (1962 y 1966) después de numerosos planteos, presiones y amenazas.

Cada golpe intentaba ensayar por la fuerza la propuesta de alguna de las fracciones económicas que encontraba eco en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el golpe de Estado de 1966 merece una atención especial porque fue en este período, durante la Revolución Argentina, cuando surgieron las organizaciones armadas que nos ocupan en este trabajo.

El golpe de 1966 se realizó después de un largo y cuidadoso período de preparación que incluyó un vasto programa de acción psicológica desplegada a través de la prensa existente e incluso de medios periodísticos creados especialmente para ese fin. Se proponía transformar profundamente la sociedad argentina y, por primera vez, los militares no se planteaban un golpe que restituyera un poder civil afín a sus intereses, sino permanecer largo tiempo en el gobierno. En esta oportunidad, las *Fuerzas Armadas* se hacían responsables de un proyecto político, económico y social. Pretendían “normalizar” al país, pero no para entregar la conducción a los partidos políticos, sino para constituirse, como institución, en el *núcleo mismo del Estado*.

Desde el primer momento, se produjeron profundos cambios institucionales. “Estamos frente a una nueva concepción de la gran política nacional”, había dicho al asumir el general Onganía.¹⁰ Se destituyó al

¹⁰ Juan Carlos Onganía, *Mensaje del teniente general Onganía al pueblo de la República con motivo de asumir la Presidencia de la Nación*, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1966.

presidente, al vicepresidente, a los gobernadores e intendentes, se clausuró el Congreso nacional y las legislaturas provinciales, se disolvieron los partidos políticos, se prohibió su actividad y se confiscaron sus bienes. Se suprimió, “por decreto”, la política.

El documento fundacional del nuevo gobierno, el Acta de la Revolución Argentina, justificaba las medidas en función de un supuesto “vacío de poder” del que responsabilizaba a las “rígidas estructuras políticas y económicas anacrónicas”, que afectaban la “tradicción occidental y cristiana”. Las medidas implicaban la ruptura de las instituciones democráticas argentinas, decretando su ineficiencia y agotamiento. Obsérvese que fueron los militares los primeros en decretar el agotamiento democrático, reiterando el mecanismo de *desaparecer* lo inmanejable. Ante la imposibilidad de desaparecer al peronismo, que reaparecía en las alianzas políticas y la lucha sindical, se optaba por *desaparecer la democracia e incluso la política*.

En palabras de los propios protagonistas, años más tarde el general Lanusse escribió, en tono de autocrítica: “Todos los responsables –Onganía y yo entre otros– no supimos ver que la política existía y que nada sería más peligroso que la soberbia de considerarla *inexistente*”.¹¹

El “cambio de estructuras” que pregona el nuevo gobierno consistía en ensayar un modelo desarrollista

¹¹ Alejandro Agustín Lanusse, *Mi testimonio*, Buenos Aires, Larserre, 1977, p. 130.

con un esquema de participación basado en grupos de poder: organizaciones empresarias, Iglesia, sindicatos, Fuerzas Armadas. De esta manera se soslayaba la confrontación con el peronismo obviando la participación electoral y reemplazándola por una vía menos desestabilizadora: la consulta de esas “fuerzas vivas”. Cabe señalar que este procedimiento nunca llegó a funcionar realmente.

Las contradicciones políticas dentro de las Fuerzas Armadas parecían inexistentes, se acallaron y se ubicaron en compartimentos estancos, sin que entraran en colisión. Los *tres comandantes en jefe*, como divina trinidad, designaron presidente al general Juan Carlos Onganía, quien, cual auténtico Mesías, recibió plenos poderes, con funciones tanto ejecutivas como legislativas. Se trataba de una verdadera autocracia, un poder de tipo personal que garantizaba hacia abajo el respeto de toda la línea de mando, es decir, el *orden jerárquico institucional*. En caso de vacante del ejecutivo, las Fuerzas Armadas designarían al sucesor, pero siempre bajo el modelo de un mando personal e indiscutido, lo que preservaría a la institución de la politización y el deliberacionismo. Ésta fue otra de las formas que adoptó *la desaparición de lo político*.

Se reestructuró *el Estado*, formando *tres sistemas verticales*: de planeamiento, de consulta y de decisión, con un Estado Mayor, *a imagen y semejanza del Ejército*. También se determinó que la Revolución tendría *tres tiempos sucesivos*: el tiempo económico, el tiempo social

y el tiempo político. Trinidades ordenadoras para *controlar, con precisión y orden cuartelario, los tiempos y los espacios de una sociedad en constante fuga*.

Amplios sectores apoyaron de inmediato al gobierno. Sólo se alzaron en su contra algunos partidos de izquierda, aunque tímidamente, y la Universidad de Buenos Aires que fue intervenida de inmediato, con bastonazos aleccionadores para los estudiantes y académicos indisciplinados.

A escasos dos meses del golpe, en franca demostración de apoyo, Augusto Vandor firmaba en la Casa de Gobierno el nuevo contrato colectivo de trabajo de su gremio. El general Perón también propiciaba el apoyo táctico a la Revolución Argentina. Los partidos políticos que habían participado en la preparación del clima golpista, en especial el frondicismo, veían con alivio la instalación de los militares en la Casa Rosada. La Confederación General Económica, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina apoyaron el movimiento castrense desde el primer momento. Unos por su incapacidad para lograr la mayoría en una competencia democrática, y otros por menosprecio de las instituciones democráticas para restituir la voz del pueblo, coincidían en una salida de corte autoritario. La Iglesia dio su bendición, mientras monseñor Caggiano, el cardenal primado, exclamaba: “¡Es una aurora! ¡Nuestro país, gracias a Dios, marcha hacia su grandeza!”¹²

¹² En Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1981, p. 256.

En síntesis, había un alto consenso acerca del agotamiento de una democracia que no había tenido oportunidad de nacer siquiera y, por lo mismo, de la necesidad del golpe, que cada grupo esperaba acomodar a sus expectativas, no siempre compatibles entre sí. La diversidad de intereses de los distintos sectores sociales e incluso militares, que participaban en la Revolución, hacía que existieran pocos objetivos verdaderamente en común.

El diagnóstico de los militares integristas indicaba que en el país existía un desfasaje entre el desarrollo económico y las conquistas sociales, consistente en una política de reparto prematura que no había garantizado previamente la acumulación necesaria. Según ellos, la demagogia populista había distribuido la acumulación de la posguerra de manera irresponsable y había promovido demandas y formas de organización desfasadas, en relación con las posibilidades reales del país. Era necesario operar una regresión, en este último terreno, que permitiera la acumulación necesaria; era imprescindible una mayor *disciplina social*. Como tantas veces en América Latina, el autoritarismo aparecía como condición de posibilidad para implantar el proyecto económico dominante, a veces corporativo, a veces liberal.

A partir de 1967 se puso en marcha el plan económico que se asentaba sobre la burguesía industrial monopólica, en particular el capital extranjero, y tendía a deteriorar el poder económico de la gran burguesía

terratiente pampeana. Se fijaron impuestos a la exportación de productos tradicionales y esas retenciones se canalizaron a la industria. Además se fijó un impuesto a la propiedad de la tierra. La Sociedad Rural comprendió que el proyecto de Onganía no era su proyecto.

En cuanto a la industria, se reforzó el proceso de concentración industrial y se promovió la operación de las empresas extranjeras y el desarrollo de las industrias básicas y de capital, eliminando a las “ineficientes” que, en general, eran las pequeñas. La industria “nacional” que esperaba beneficiarse con los militares comprendió que éste tampoco era su proyecto.

Se redujo el salario y su participación en el PBI pasó de representar el 42 por ciento en 1967 al 39 por ciento en 1969. Se reprimió a la oposición sindical no controlada por los sindicatos participacionistas, para mantener el orden social y frenar un movimiento obrero cuyas conquistas sociales limitaban las posibilidades de acumulación. Para el sindicalismo vandorista no resultaba sencillo mantener el apoyo al gobierno bajo estas circunstancias.

Como si fuera poco, los “arcángeles blindados”, como los llamó acertadamente Rouquié, se lanzaron a la defensa de la moralidad y censuraron todo aquello que no correspondiera con su modelo autoritario e integrista (*jerarquía, organización, unidad* eran sus valores principales). Dispusieron el tipo de *comportamiento* que se podía permitir en las calles y, por ejemplo, prohibieron el beso entre hombres y mujeres; ordenaron

el largo idóneo de cabellos y barbas, que si no correspondían a la norma eran rasurados por la autoridad; fijaron el tipo de *ropa* femenina que debía considerarse moral o inmoral. Una ordenanza de la municipalidad de Buenos Aires, del 27 de julio de 1966, indicaba que en los salones de baile: “La *visibilidad* deberá ser tal que en todo el ámbito del lugar y desde cualquier ángulo del local, se pueda apreciar con absoluta certeza la *diferencia de sexo* de los concurrentes”. Asimismo se condenaba “la fabricación, preparación, exhibición, venta o tenencia de sustancias, drogas o aparatos para usar con *finés de placer*”. Se prohibió todo lo que incitara al sexo, desterrado formalmente del *universo ascético-cuartelario*.¹³

El general Onganía consideraba que la Revolución instauraría los principios de “*orden, autoridad, responsabilidad y disciplina*”, es decir, los valores de la vida militar dentro de la sociedad. “Autoridad, organización, grandeza nacional. La ideología de la Revolución Argentina significa la *proyección sobre el Estado y la sociedad de los valores de la gran institución burocrática que es el ejército profesional*.”¹⁴

Por su parte, las propuestas económicas y políticas del nuevo modelo tecnocrático resultaron demasiado esquemáticas como para funcionar en una sociedad que no se caracterizaba precisamente por el orden. Si

¹³ Ricardo Rodríguez Molas, *Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina*, Buenos Aires, Eudeba, 1985.

¹⁴ Alain Rouquié, *op. cit.*, p. 266.

bien la racionalización económica (que implicaba el congelamiento de los salarios, la reducción de las indemnizaciones por despido y la virtual prohibición de la huelga), unida al control de la inflación y del déficit presupuestario, dio buenos resultados para cierta expansión industrial, también tuvo otros efectos: favoreció la desnacionalización de la economía y aumentó el descontento social.

La resistencia sindical a las medidas económicas fue causa de numerosas huelgas que se reprimieron violentamente, ante el silencio de los sindicatos colaboracionistas. Al abrigo de estas luchas, fue creciendo de manera espectacular un sindicalismo combativo que en 1968 se nucleó alrededor de Raimundo Ongaro, en la CGT de los Argentinos. Los sindicatos combativos libraban un doble enfrentamiento: por una parte, contra el gobierno militar y, por otra, contra la burocracia sindical, aliada del gobierno. Disputaban, a la vez, mejores condiciones de vida para los trabajadores y la conducción del movimiento sindical.

Ya entonces los militares acuñaron el término subversivo, con una connotación tan difusa como para atribuir el rasgo de *enemigo* a *todo aquel que no fuera idéntico*. Esta lógica, en principio dual, tiende finalmente a una concepción unicista. Dado que el conflicto se concibe como guerra, el objetivo es destruir al enemigo, aniquilar al Otro, para que quede sólo Uno. Es el principio de la lógica totalitaria: *Un pueblo, Un enemigo, Un poder, Una verdad*, presente ya en aquellos años.

Las gigantescas movilizaciones de protesta del Cordobazo, en mayo de 1969, reunieron la fuerza del sindicalismo combativo con la del movimiento estudiantil. “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”, la vieja consigna de la izquierda se hacía realidad en las calles de Córdoba. Una verdadera insurrección popular, con combates que duraron dos días, marcó el fin del onganiato, incapaz de dar otra respuesta que la simple represión y algunas reformas de tipo administrativo.

El Cordobazo, con ciertos “aires” del Mayo francés, tuvo una violencia inusitada. Como resultado murieron más de treinta personas, pero quedaba claro que por lo menos una parte de la sociedad se resistía a convertirse en el cuartel disciplinado, obediente y silencioso, en el que sólo se escuchan las órdenes de mando. La política *desaparecida*, cuya vida había subsistido sólo de manera *subterránea, reaparecía*, a pedradas y a tiros. *Reaparecía*, además, *mutada* en otras formas de politización y organización.

La violencia militar comenzaba a reproducirse y a encontrar respuesta, también violenta, desde otros sectores de la sociedad. De esa fecha datan las primeras acciones de los grupos armados que luego conformaron la poderosa guerrilla. En 1968 se había detectado y destruido un foco guerrillero en Taco Ralo, Tucumán, antecedente directo de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). En junio de 1969 un grupo comando que no se identificó asesinó a Vandor, el líder de los metalúrgicos que disputaba el poder de Perón. En 1970, exactamente

un año después del Cordobazo, se produjo el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los responsables de los fusilamientos de peronistas en 1956. Ésa fue la primera acción militar reconocida por Montoneros y dos meses después aparecieron públicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con el copamiento armado de Garín, una localidad de la provincia de Buenos Aires, cercana a la Capital Federal. En 1969, todos los grupos guerrilleros estaban, de hecho, en su etapa de entrenamiento y equipamiento, a punto de entrar en acción.

El nacimiento de la guerrilla representaba la disputa del monopolio de la violencia, que ejercían las Fuerzas Armadas, por parte de un sector de la sociedad civil. No en vano, los grupos se habían autodesignado como Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario Popular. No en vano, uno de sus blancos preferidos era el Ejército, columna vertebral de las Fuerzas Armadas. Si hasta entonces había sido imposible el asentamiento de una hegemonía política integral, ahora se disputaba al poder instituido, incluso la posesión y uso de las armas. Las “expropiaciones”, los “ajusticiamientos”, los “juicios revolucionarios”, eran un intento de justicia y *poder armado paralelo al del Estado*, que en el caso argentino equivale a decir al de las Fuerzas Armadas.

El Cordobazo fue la más clara expresión del desborde social y político del régimen. Las diferencias entre las Fuerzas Armadas y el gobierno se profundizaron.

El estilo autocrático de Onganía, quien, además de su cortedad política, pretendía resolver la difícil situación mediante la represión y como si su poder no emanara precisamente de la institución militar, terminó por minar su representatividad entre sus propios camaradas.

Sin embargo, antes de partir, el general adoptó una de las últimas medidas de su gobierno: la instalación de la pena de muerte, que entró en vigencia a partir del 2 de junio de 1970. La ley afectaba los delitos de privación ilegítima de la libertad (secuestros), atentados contra establecimientos militares y el uso ilegítimo de insignias y uniformes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, es decir, el accionar básico de la guerrilla. Aunque nunca se aplicó, el Estado asumía, por lo menos formalmente, el *derecho soberano de vida y muerte*.

El 8 de junio de 1970 la Junta de Comandantes relevó al general Onganía y unos días después nombró como Presidente al también general Roberto Marcelo Levingston. En esa oportunidad, se cuidó mucho de especificar que las decisiones importantes serían tomadas por la Junta.

La política económica se flexibilizó, y disminuyó considerablemente la presión sobre los trabajadores. También se limitó la penetración extranjera en la economía. Se buscaba una descompresión económica que permitiera la posterior descompresión política (siempre en estos órdenes precisos e hipotéticos del pensamiento militar), para evitar el estallido. No obstante, el gobierno siguió siendo tan impopular como el anterior. Una

vez que el “bloqueo” del poder se mostró vulnerable, no homogéneo, los disparos sobre su estructura ya no cesaron, hasta derribarlo. Este mismo mecanismo operó repetidas veces en la Argentina.

En marzo de 1971, otro levantamiento popular también en Córdoba –el Viborazo–, que el Ejército se negó a reprimir, terminó con el gobierno de Levingston.

Por fin, el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de la Junta de Comandantes, asumió el Ejecutivo nacional, buscando la salida política a una crisis bastante profunda que comenzaba a ser un dato “estable” en la realidad argentina. Ante el evidente fracaso del proyecto iniciado en 1966, llamó a elecciones generales y comenzó a preparar la retirada de las Fuerzas Armadas, una retirada que debía ser lo menos desgastante posible. Pero dada la situación social de la Argentina, aun éste era un objetivo demasiado alto.

El llamado a elecciones quedó condicionado a la formación del Gran Acuerdo Nacional (GAN), que suponía un consenso entre los principales actores políticos para garantizar elecciones limpias pero impidiendo el “retorno al pasado”; es decir, los militares renunciarían a mantener el gobierno y permitirían la participación del peronismo, y los peronistas desistirían de la candidatura de Perón y pondrían en orden a la guerrilla, para entonces muy activa. En suma, se acordaba realizar elecciones sin Lanusse y sin Perón, expresión por sí misma de la llamada *antinomia* peronismo-anti-peronismo.

El grado de desgaste al que había llegado la Revolución Argentina se hacía evidente en la enunciación de objetivos del GAN, hecha por el propio general Lanusse: “Unir a los adversarios y aislar a los enemigos”, era una meta que no consideraba siquiera la posible existencia de amigos. No obstante, los militares se concebían a sí mismos tutelando un proceso de “convalecencia tras una larga enfermedad”.¹⁵

La crisis económica, la gran movilización social que agitaba todo el país con un nivel creciente de violencia, la *desaparición por decreto de la política* que había mantenido una subsistencia *subterránea* y ahora reaparecía *transmutada* en sus formas más radicales y, en consecuencia, el auge de una guerrilla activa y con un considerable apoyo en sectores populares y medios, dejó al gobierno militar sin más recurso que el uso poco inteligente de la represión.

La tortura, normalmente con picana, se convirtió en moneda común y corriente durante la Revolución Argentina. Por lo regular, de acuerdo con las denuncias de los afectados, se acompañaba de golpes, violaciones y vejaciones. Estas prácticas, aunque no tan extendidas, tenían antecedentes en el país. De hecho, la picana eléctrica es un invento argentino que comenzó a usarse aproximadamente en 1934, durante la Década Infame,

¹⁵ Declaraciones de Arturo Mor Roig, ministro del Interior, en Darío Cantón, *Elecciones y partidos políticos en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 235.

y no descansó bajo ninguna administración. Pero lo que no tenía antecedentes era el fusilamiento de prisioneros. El 22 de agosto de 1972, en una base de la Marina, ocurrieron los fusilamientos de Trelew. Después de la fuga de un grupo de prisioneros y bajo la excusa de un nuevo intento, se fusiló a mansalva a dieciséis presos, hombres y mujeres, todos militantes de diversas organizaciones guerrilleras.

Durante los últimos años de la dictadura, también se practicó la *desaparición de personas* como una técnica que, sin llegar a ser generalizada, fue más allá de los casos aislados que se habían producido con anterioridad. Entre 1970 y 1972 se produjeron una docena de desapariciones, de las cuales sólo uno de los cuerpos se encontró con posterioridad.¹⁶

Detenciones injustificadas, tortura sistemática, desaparición de personas y fusilamiento de prisioneros fueron algunas de las modalidades de este último período de la Revolución Argentina, que no hicieron más que exacerbar el clima de violencia. Según estimaciones de Montoneros, entre 1966 y 1973 murieron alrededor de cien militantes y se encarceló a 500;¹⁷ a partir de 1976 la relación se invertiría y serían mucho más numerosos los muertos que los detenidos. Incluso en palabras de

¹⁶ Eduardo Luis Duhalde, *El Estado terrorista argentino*, Buenos Aires, El Caballito, 1983.

¹⁷ Richard Gillespie, *Soldados de Perón*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, p. 148.

Rosendo Fraga, fiel representante del punto de vista militar, se practicó el “laboratorio de lo que sucedió en materia de lucha contra la subversión en la segunda mitad de la década del 70... [En los primeros años de esa década] el Ejército *se ve obligado* a participar en la represión del accionar terrorista y de las movilizaciones de protesta social”,¹⁸ que se contaban por miles. También justifica Fraga el uso de la tortura, aduciendo que “*se hacía inevitable* en términos operacionales y militares el *obligar* a los prisioneros a brindar información”. En otras palabras, estaban *obligados a obligar*, clásico argumento del autoritarismo de todos los colores.

Cuanto más reprimía el régimen, más se radicalizaba la movilización y, como parte de ella, un peronismo que pasaba a la ofensiva después de tantos años de proscripción y que se encontraba revitalizado por la presencia de una nueva generación de militantes.

Desde el exilio, Perón agudizaba las contradicciones y empujaba al gobierno militar al abismo. En julio había declarado: “No hay peronismo y antiperonismo. La *antinomía* es entre la revolución y la contrarrevolución”,¹⁹ intentando asimilar en su política a sectores aun más vastos que el propio peronismo y enunciando una postura radical afín con los sectores de la izquierda del

¹⁸ Rosendo Fraga, *Ejército, del escarnio al poder*, Buenos Aires, Planeta, 1988, pp. 17, 23.

¹⁹ Juan Domingo Perón, en Liliana De Riz, *Retorno y derrumbe*, México, Folios, 1981, p. 34.

movimiento, cuya movilización lo beneficiaba. Asimismo, convencido de su capacidad de controlarla y manipularla, reconocía a la guerrilla peronista como parte del movimiento, y avalaba la violencia: “La violencia en manos del pueblo no es violencia; es justicia”, aseguraba en *La hora de los hornos*, película de gran difusión en los medios militantes, que circulaba de manera clandestina.

Refiriéndose a su distancia del país, Perón la justificaba con una argumentación estrictamente militar, que muestra esa lógica de *reducción de lo político a lo militar*, presente tanto en el pensamiento militar de la época como en el del peronismo y la guerrilla. Decía Perón: “Hay un principio o una regla de la conducción [militar, debió agregar] que dice que el *mando estratégico* no debe estar jamás en el *campo táctico* de las operaciones”.²⁰ También en 1973, bajo esta misma lógica guerrera, afirmaba: “El enemigo es la dictadura militar”.

La agregación de lo político a lo militar, la concepción de lo político como extensión de lo militar –invirtiendo el postulado de Clausewitz– parece haber sido un rasgo distintivo de esa época y no se puede independizar de la *militarización del Estado* y el desplazamiento de sus funciones eminentemente políticas. La *imposibilidad de definir la lucha* entre los distintos sectores sociales y asentar relaciones estables de poder, la *dificultad para alcanzar la hegemonía y delimitar el núcleo duro del poder*,

²⁰ *Ibidem*, p. 35.

fijaba a los distintos sectores en una *guerra de posiciones* crecientemente militar. Como consecuencia inmediata, *el Estado se confunde con las Fuerzas Armadas, la política aparece como guerra, los adversarios como enemigos*.

Atacado desde distintos ángulos, presionado por una sociedad civil y política que anhelaba recuperar los espacios públicos, el gobierno no tuvo más alternativa que abrir un proceso electoral amplio, aunque vetó la candidatura de Perón por requisitos formales (lugar de residencia), e intentó fijar ciertos condicionamientos. La fogosidad de la campaña electoral peronista fue extraordinaria. Las grandes movilizaciones, organizadas por la Juventud Peronista (JP), fueron a la vez una reivindicación del movimiento peronista, la prueba contundente del fracaso militar y la validación de la guerrilla. “Cámpora al gobierno, Perón al poder” fue la consigna de la JP, renunciando que las Fuerzas Armadas no podrían controlar el proceso. El peronismo, que había logrado desarticular el GAN y convertir el proyecto de alianza de las fuerzas democráticas en contra del peronismo en una alianza en contra de la dictadura, ganó las elecciones con el 49,5 por ciento de los votos. “Lanusse, Lanusse, hiciste un papelón. Habrá segunda vuelta, la vuelta de Perón.”²¹

²¹ Consigna de la Juventud Peronista, que aludía a que las elecciones no requerían una segunda vuelta por el sistema de *ballotage* francés, que había implantado el gobierno militar para dificultar el triunfo peronista.

Sin embargo, el otro 50,5 por ciento, aunque no logró unificarse tras una propuesta y fue dividido a la votación, era decididamente antiperonista. El país estaba virtualmente dividido en dos y, a la vez, falsamente dividido de esa manera. La disputa en términos de peronismo y antiperonismo hacía perder de vista los innumerables matices de actores verdaderamente no homogéneos en ambos “campos” de la contienda.

Cuando el 25 de mayo de 1973 Lanusse entregó la Presidencia al doctor Héctor J. Cámpora, la retirada elegante que había deseado se convirtió en una literal huida entre insultos de una multitud enardecida. El desfile militar se debió anular para evitar incidentes. “Los manifestantes [quedaron] dueños de la Plaza de Mayo y sus alrededores. Las tropas que estaban formadas fueron particular blanco de ataques con insultos, proyectiles y pintadas sobre los uniformes y vehículos con toda clase de improperios... Los conscriptos del Regimiento de Patricios, con sus uniformes históricos, tuvieron que blandir sus antiguas bayonetas del fusil en desuso, mientras que los uniformes eran escupidos por manifestantes... En los vehículos blindados fueron pintadas leyendas ofensivas con aerosol... Más de un oficial que integraba la formación sollozó en una mezcla de rabia e impotencia.”²² “Se van, se van y nunca volverán”, gritaban entusiasmadas las columnas de la Juventud. Pero volvieron.

²² Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 39.

SEGUNDAS PARTES...

La asunción de Héctor J. Cámpora a la Presidencia se produjo en un clima de alta movilización, sobre todo de la izquierda peronista, que el mismo 25 de mayo logró la liberación de sus presos, gracias a la presión para obtener una amnistía general. El presidente Cámpora declaraba frente a la Asamblea Legislativa: “...una juventud maravillosa supo oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. ¿Cómo no va a pertenecer también a esa juventud este triunfo si lo dio todo –familia, amigos, hacienda, hasta la vida– por el ideal de una patria justicialista”. Esa *juventud maravillosa* no era otra que la guerrilla peronista, reivindicada ahora en calidad de abanderada de la patria justicialista.

La izquierda peronista tuvo entonces acceso a numerosos puestos de gobierno y la ilusión de un poder que no logró consolidar. Menos de un mes fue necesario para que se iniciara el avance de los sectores ortodoxos, con Perón a la cabeza.

El 20 de junio, el general regresó al país, en medio de una movilización sin precedentes, por el número y el fervor. Desde muy temprano, antes de que amaneciera, de las barriadas populares salieron columnas formadas por hombres, mujeres y viejos, gente del pueblo que, dada la vigilancia para impedir el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, atravesaron ríos y campos para dar la bienvenida a Perón. Grupos parapoliciales y de la derecha peronista dispararon sobre las columnas afines a la JP, la Tendencia Revolucionaria, dejando un saldo que, aunque no hubo cifras oficiales, se estimó en doscientas víctimas. Al día siguiente Perón emitía un discurso en el que, no sólo no condenaba a los responsables, sino que avalaba implícitamente a la derecha, quitándole a la JP su arma más importante: la movilización debía terminar. Era preciso “volver al *orden* legal y constitucional”.

El 11 de julio, el secretario general de la CGT, José Rucci, declaró a la prensa: “Se acabó la joda”. En otro lenguaje pudo haber dicho: “Se acabó la diversión”. En efecto, el 13 de julio renunciaban los doctores Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, presidente y vicepresidente de la República. Raúl Lastiri, yerno de José López Rega, asumió la Presidencia. Representaba a los grupos más reaccionarios del peronismo, que es mucho decir. Su ascenso significó el alejamiento del gobierno de ciertas figuras ligadas a la llamada Tendencia, como el ministro del Interior, Esteban Righi. El 2 de agosto, en contra de las presiones de la Juventud que proponía

al doctor Cámpora como candidato a la vicepresidencia, el Partido Peronista proclamó la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón e Isabel Perón). El avance de la derecha peronista había comenzado. Las relaciones de fuerza se recomponían en beneficio de los núcleos duros del poder.

Así como la campaña de Cámpora había tenido el tono radicalizado de la Juventud, la de Perón recayó en la CGT. Los resultados electorales señalaron el mayor apoyo que nunca hubiera tenido Perón, con el 62 por ciento de los sufragios.

El hecho de contar con un porcentaje tan significativo alentó a Perón hacia una meta más pretenciosa que liderar el partido mayoritario. Intentó conformar una *nueva alianza* para la reconstrucción del país. Para ello proponía un pacto social que disciplinara los conflictos entre el capital y los trabajadores. En este sentido, tal como lo señala certeramente Liliana De Riz, los objetivos de Perón coincidían con los que se había planteado Lanusse, aunque con distintos contenidos. En última instancia, se orientaban a la *reconstitución de un núcleo duro* del poder, a partir de un gran acuerdo que restableciera la convivencia y el orden, hiciera innecesaria la violencia y permitiera la estabilidad de las instituciones.

En su mensaje del 2 de agosto de 1973, Perón aseguraba, recurriendo a una de sus metáforas deportivas, gusto que también compartía con Lanusse, que su tarea era “ir persuadiendo a todos los argentinos para que comencemos a patear todos para el mismo arco”. Se proponía

una política de unificación nacional poco probable considerando el grado de conflicto no resuelto, que persistía, bastante abiertamente, en la sociedad. Mientras unos sectores se proponían el control del movimiento peronista por medio de la burocracia, otorgando condiciones laborales aceptables para garantizar el orden y la eficiencia del aparato productivo, en el marco de un proyecto moderno de acumulación, los grupos más radicales propugnaban un socialismo nacional que, aunque bastante indefinido, presuponía cambios drásticos en la distribución y en el sistema de propiedad, así como la liquidación de la burocracia sindical, es decir, más agitación y organización social.

La propuesta de Perón, mucho más amplia que la que había manejado durante sus gobiernos anteriores, comprendía la posibilidad de constituir lo que llamaba una “comunidad organizada”, una “democracia integrada” capaz de modernizarse y establecer instancias de mediación con las poderosas corporaciones. Pero el mapa político del país se había transformado: los sindicatos ya no eran el hijo obediente del Estado, sino que habían desarrollado y probado un poder propio a lo largo de dieciocho años de resistencia; las Fuerzas Armadas habían hecho otro tanto y, si nunca fueron una corporación dócil, ahora tenían una autonomía relativa y un poder institucional entrenado en el ejercicio del gobierno; la Juventud, aunque se proclamara hija del general, era una hija rebelde que no cesaría en la defensa de un proyecto político divergente

de la comunidad organizada. Los puntos de apoyo de Perón no eran muy firmes.

Las Fuerzas Armadas, aunque tenían en su seno, sobre todo a nivel de mayores y oficiales subalternos, sectores nacionalistas y populistas, habían permanecido bajo la hegemonía del liberalismo antiperonista. De hecho, en el momento de asumir Cámpora la Presidencia, el 63,2 por ciento de los altos mandos había participado en el golpe militar de 1955 o en el intento de golpe de 1951.²³

El nuevo gobierno designó a Jorge Raúl Carcagno como comandante en jefe del Ejército. Carcagno, de posturas populistas, se proponía un “reencuentro entre el Ejército y el pueblo”, que producía malestar dentro del arma, y tuvo algunas aproximaciones dudosas con la Juventud reprobadas por el propio Perón.

Lentamente, la represión comenzó a desatar sus hilos. A fines de 1973, así como existían en el ejército pequeños sectores asociados a la izquierda peronista y otros más numerosos vinculados con el antiperonismo tradicional, había también “grupos nacionalistas ortodoxos que se habían ligado con elementos de la estructura sindical y mantenían relaciones con sectores de la Fuerza Aérea [que] propiciaban una solución política a la chilena... con la eliminación violenta de todos los elementos de izquierda”.²⁴

²³ Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 28.

²⁴ *Ibidem*, p. 86.

Carcagno, cuyo perfil nacional y populista lo vinculaba más a los sectores de la izquierda que al lopezreguismo o al sindicalismo, descompensaba la política de Perón, de franco acercamiento a estos últimos. En diciembre de 1973 fue reemplazado por el general Leandro E. Anaya, perteneciente a una tradicional familia de militares, que no tenía un pasado antiperonista ni lanussista. Tampoco pertenecía a la Caballería, arma privilegiada desde la Revolución Libertadora. Por estas características, que compartía con los generales Videla y Viola, jefe de Estado Mayor y secretario general, respectivamente, Perón no lo consideraba peligroso.

Si Perón insistía en el orden era precisamente porque se requería una fuerte *disciplina social* para mantener el Pacto Social, clave de su política económica. Pero la disciplina se funda en el *control*, que precisamente Perón no tenía garantizado, a pesar del 62 por ciento de los votos.

El Pacto Social se concebía como una especie de tregua por la cual se regularon ciertos salarios y precios, que debían permanecer inamovibles por el plazo de un año. Pero los empresarios no estaban dispuestos a que se redujeran sus ganancias; tampoco querían ni podían enfrentar al capital transnacional. Los dirigentes sindicales, a su vez, no querían resignar el poder adquisitivo del salario con el riesgo de perder el apoyo de sus bases. En realidad, la burocracia sindical había estado dispuesta a negociar, durante todos esos años, salarios que no eran convenientes, pero en esa coyuntura

se enfrentaba con la competencia política de la izquierda y de la Tendencia que, dentro de los mismos sindicatos, intentaba disputar su conducción. Ese elemento hacía que no fuera tan fácil negociar con ellos la reducción del salario real. De hecho, durante el gobierno peronista no se logró reducir los conflictos sindicales.

El control del sector obrero era vital para la consecución del Pacto. En esto se basó gran parte del apoyo de Perón a la burocracia sindical. La sanción de la ley de asociaciones profesionales en noviembre de 1973, con la oposición de la izquierda del peronismo, reforzó el poder de los sindicalistas. Las charlas semanales que Perón ofrecía en la CGT representaban, de igual manera, un verdadero aval a la burocracia. Por si no quedaba claro para alguien, el general afirmaba: “La CGT puede estar segura con los dirigentes que tiene, aunque algunos (la JP) digan que son burócratas”.²⁵

No obstante, continuaron los paros y las tomas de fábrica. Estas acciones no implicaban necesariamente un control paralelo de los sectores radicalizados, sino más bien una pérdida de control, una *fuga* en el modelo de concertación.

La renegociación del Pacto no satisfizo a nadie. Los empresarios recurrieron a la doble facturación, el acaparamiento y el mercado negro para eludir el control de precios. Los sindicatos negociaron otros salarios, en acuerdos por empresa que beneficiaban a los gremios

²⁵ Juan Domingo Perón, en Liliana De Riz, *op. cit.*, p. 94.

mejor organizados. Los acuerdos institucionales entre las clases y fracciones de clase con el gobierno se fueron rompiendo uno a uno, de manera solapada, aunque manteniendo la apariencia de que seguían vigentes.

La Tendencia no quería romper lanzas con Perón, y seguía reconociendo su liderazgo, pero sólo a nivel del discurso. Sin embargo, dado que el recurso de las armas había resultado tan eficiente, nunca renunció definitivamente a él. De hecho, ya en septiembre de 1973, incluso antes de la asunción de Perón, había asesinado al secretario general de la CGT, José Rucci, en un operativo armado cuya autoría no reconoció públicamente. Era, sin embargo, un recordatorio anónimo del poder de la violencia, una forma de acelerar la resolución de la “contradicción ideológica” que Firmenich reconocía tener con Perón. Para el general no quedaban dudas de que controlar aquella “juventud maravillosa” sería difícil.

Desde el seno del gobierno también se aceptaban las armas. A fines de 1973 se formó la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), organización parapolicial dirigida por el comisario general Alberto Villar, jefe de la Policía Federal entrenado en la Escuela de Panamá, y por José López Rega, ministro de Bienestar Social. Su personal se integró con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ya fuera en actividad o retirados, y con militantes de la derecha del peronismo. Su objetivo: asesinar y *desaparecer* a militantes, colaboradores o simpatizantes de los sectores

“revolucionarios”, fueran o no peronistas, con un enorme nivel de vaguedad de sus “blancos” probables.

Si la disposición a la violencia crecía dentro del peronismo, donde aun los grupos más radicales reconocían cierto compromiso con el gobierno electo y su institucionalidad, en los sectores de la izquierda no peronista el abandono de las armas fue apenas un breve impasse. El Ejército Revolucionario del Pueblo, de orientación trotskista, no tardó en realizar una acción armada y reconocer abiertamente su autoría. En enero de 1974 intentó copar una guarnición militar en la localidad de Azul; al día siguiente, Perón declaró: “...aniquilar cuanto antes a ese terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana”. El mensaje, con un destinatario sin nombre y apellido, un “terrorismo” genérico, se dirigía a cualquiera a quien le cupiera dicho nombre, y alcanzaba sin duda a la guerrilla peronista, más allá de su supuesta buena fe.²⁶

La Tendencia comenzó a perder posiciones rápidamente. Los gobernadores de Córdoba y Buenos Aires fueron desplazados y se inició una ofensiva contra el de Mendoza; todos ellos cercanos a Montoneros. Se empezaron a producir ataques violentos contra los locales de la JP y contra sus militantes, por parte de la derecha del peronismo. La ruptura pública entre Perón y

²⁶ Juan Domingo Perón, discurso del 21 de enero de 1974, en Liliana De Riz, *op. cit.*, p. 107.

los Montoneros se produjo el 1° de mayo, apenas dos meses antes de la muerte del general, que ocurrió el 1° de julio de ese mismo año.

Si en vida de Perón había sido imposible poner bajo control a los sindicatos, al empresariado y a la guerrilla, a su muerte los enfrentamientos sociales y políticos se agudizaron hasta niveles extraordinarios. La pugna se desató sin intermediación posible.

A la lucha entre la derecha y la Tendencia, se agregaron las diferencias entre el gobierno y los sindicatos que no estaban dispuestos a ceder su poder a una burocracia política en la que no se sentían representados. En consecuencia, el sindicalismo trabó vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas que veían con malestar la predominancia del grupo de López Rega. Sin embargo, todos coincidían en la necesidad de desbaratar la guerrilla. El Ejército comenzó a recuperar gradualmente su peso político tradicional.

La represión a la guerrilla fue razón para reprimir igualmente la protesta sindical de grupos opuestos a la burocracia. Las ocupaciones de fábricas quedaron prohibidas por la ley y se eliminó a los principales sindicatos independientes, peronistas o no. Se reprimió y encarceló a sus dirigentes. La protesta obrera disminuyó. Comenzaba *el orden que emana de la represión*. El programa nacional y popular había quedado atrás.

La violencia creció de manera inusitada. La derecha y la izquierda del peronismo peleaban *a muerte* sus espacios en el movimiento. Mientras la guerrilla multiplicaba

su accionar armado, los grupos parapoliciales incrementaban los atentados y secuestros de militantes, cuyos cuerpos torturados y sin vida aparecían días más tarde. Las AAA y otras organizaciones similares cobraban víctimas en todo el país.

En agosto de 1974, a un mes de la muerte de Perón, el Ejército asesinó a dieciséis guerrilleros del ERP que intentaban copar un regimiento. El ERP lanzó una serie de operativos de represalia contra los miembros de las Fuerzas Armadas. En septiembre, Montoneros pasó a la clandestinidad y recrudesció su accionar armado contra personal de seguridad, especialmente policía. Hacia fines de año los asesinatos se sucedían, afectando sobre todo a la militancia de izquierda. La revista *El Caudillo*, financiada por el gobierno, ostentaba como lema: "*El mejor enemigo es el enemigo muerto*". Ya entonces, la lógica amigo-enemigo planteaba no sólo la exclusión del Otro sino su eliminación lisa y llana; la distinción entre *lo que debe vivir y lo que debe morir*. La potencialidad asesina del autoritarismo se ponía en acción, protegida desde el Estado.

En pocos meses, el incremento de los ataques de la guerrilla a las guarniciones y al personal militar había contribuido a un cambio de posición en las Fuerzas Armadas. De una postura prescindente con respecto a la represión, los militares pasaron a reivindicar la necesidad de su intervención en la lucha antisubversiva. El ataque real a las Fuerzas de Seguridad, sobredimensionado por los sectores más duros, aprovechó y multiplicó la

confrontación en un clima de “paranoia” preexistente. Los militares se sentían guerreros amenazados por una fuerza oscura y poderosísima que los civiles no eran capaces de controlar. Una vez más, debían *salvar* al país de un peligroso enemigo. Jamás consideraron su participación en el incremento de esta espiral de violencia porque su objetivo era *acabar* con lo que no podían *controlar*. Un año después de la muerte de Perón, la violencia había cobrado 503 víctimas fatales; de ellas 54 era policías, 22 militares y las restantes 427, militantes. El “cinco por uno” con que había amenazado el peronismo en el gobierno se cumplía, pero al revés, cobrando más de cinco víctimas populares por cada una de las fuerzas de seguridad. La cuantificación de las muertes importa porque, a la vez que señala la existencia de una confrontación violenta, muestra su dirección principal. En cualquier confrontación, el que tiene mayor poder militar es el que es capaz de generar más víctimas y el que, por lo mismo, es beneficiario y responsable de la violencia.

Ya en febrero de 1975, el Poder Ejecutivo había emitido un decreto para la represión del foco guerrillero rural que había montado el ERP en la provincia de Tucumán. Por esa disposición, *que no contó con la oposición de los partidos políticos*, se daba intervención al Ejército en la represión de las actividades subversivas y se instruía: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o

aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.²⁷

Con el Operativo Independencia se inició la práctica sistemática de una nueva modalidad represiva, con un conjunto de técnicas *ad hoc* que giran alrededor de una figura central: *el campo de concentración y la desaparición de personas como metodología de represión*. La experiencia que el Ejército realizó en Tucumán fue sin duda una experiencia piloto, que luego se desplegaría en Córdoba y, por último, a nivel nacional.

El testimonio de Juan Martín, sobreviviente de ese operativo, citado por Duhalde en su libro, es por demás ilustrativo: “...este operativo significó la militarización de la totalidad de la vida tucumana... La lucha contra la guerrilla rural, pero también la represión contra los trabajadores y otros sectores populares se fue perfilando: ...*secuestros, centros clandestinos de concentración de prisioneros, interrogatorios y torturas, retención ilegal y sin término de los detenidos*, masificación de la represión... La llamada ‘Escuelita de Famaillá’ tiene el extraño privilegio de haber sido el primer *campo clandestino de concentración de prisioneros*... Su modo principal de accionar es la reiteración impune de la metodología *secuestro-desaparición-tortura*, y la reiteración de ese trágico ciclo”.²⁸

²⁷ *La Nación*, 6 de febrero de 1975. El subrayado es mío.

²⁸ Juan Martín, testimonio ante CADHU, en Eduardo Luis Duhalde, *op. cit.*, pp. 49-50.

El protagonismo del Ejército en la represión, no sólo en Tucumán, fue respaldado por la Armada, cuyo rol político iba en ascenso. Las relaciones entre las dos armas se incrementaron y se establecieron acuerdos que excluían a la Aeronáutica, poco confiable por su escasa participación en la lucha antisubversiva. Ya entonces surgió la idea de crear un “organismo coordinador para la lucha contra la subversión, el que debía estar en manos de un oficial de las Fuerzas Armadas en actividad, así como la necesidad de que el personal militar tuviera acceso a los archivos de la Policía Federal, lo que no estaba permitido entonces”.²⁹ Es decir, un embrión de los que sería la Comunidad Informativa después del golpe de 1976. Estos acuerdos no impedían que existieran suspicacias y pugnas entre las dos armas. Dentro del Ejército las posiciones tampoco eran homogéneas y oscilaban entre el apoyo al gobierno de Isabel Perón y el distanciamiento creciente de algunos sectores o, en otros términos, hasta qué punto la institución debía involucrarse o no en las pugnas internas del peronismo.

La desconfianza militar hacia el sector lopezreguista fue incrementándose y, en poco más de un año, las Fuerzas Armadas pasaron de estar a la defensiva a ser un factor de presión sobre el gobierno, y a realizar acuerdos con los partidos políticos opositores, el sindicalismo peronista, ciertos grupos empresarios y la Iglesia. La

²⁹ Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 150.

distancia creciente del Ejército con el gobierno provocó el reemplazo del general Anaya, el 13 de mayo de 1975, por el general Alberto Numa Laplane, cercano al ministro de Bienestar Social y al gobierno.

Desde antes del relevo de Anaya, circulaba en el Ejército un informe sobre las actividades de la AAA que demostraba los vínculos del equipo de López Rega y de oficiales en actividad con 108 miembros de la organización y con cinco de sus sedes. Esta información fue manejada por los generales Videla y Viola como forma de presión sobre el gobierno, ya que nunca trascendió a la opinión pública y mucho menos a la Justicia. El 28 de junio se produjo un enfrentamiento público entre el almirante Massera y José López Rega, y desde entonces la Armada adoptó una postura coincidente con el sector profesionalista del Ejército, que tomaba paulatinamente distancia de la lucha de poder dentro del peronismo.

Los sindicatos, desconformes con la predominancia y el poder creciente del grupo de López Rega dentro del gobierno, entraron en colisión con la política económica, dispuestos a impedir que la izquierda ganara terreno con su postura crítica, que las circunstancias justificaban ampliamente. “El ajuste salarial de junio de 1973 había durado nueve meses. El de marzo de 1974, seis meses; el de octubre de 1974 rigió durante cuatro meses; el de febrero de 1975 se agotó en abril de 1975.”³⁰ Toda concertación entre el Ministerio de Economía y

³⁰ Liliana De Riz, *op. cit.*, p. 128.

los sindicatos fue imposible. La CGT movilizó a sus bases y forzó las renuncias del ministro de Economía impuesto por López Rega y su grupo, en julio de 1975. Las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir a los sindicalistas, y se exigió el relevo de Alberto Numa Laplane como comandante del Ejército. Roto el círculo de burócratas lopezreguistas que la rodeaba y su posible apoyo en las Fuerzas Armadas, Isabel Perón quedó en manos de la dirigencia sindical.

A partir del enfrentamiento de julio de 1975 con los sindicatos, y el posterior relevo de Laplane, quien representaba el compromiso de un sector de las Fuerzas Armadas con el gobierno, el general Jorge Rafael Videla asumió la Comandancia en Jefe del Ejército. La destitución de Laplane representó, dentro de las Fuerzas Armadas, la preeminencia de la perspectiva institucional con respecto a la política externa; es decir, la recuperación de la autonomía de las Fuerzas Armadas como factor de poder central, en lugar de girar en torno a otros sectores políticos nacionales. Desde ese momento estuvo claro que las Fuerzas Armadas no se comprometerían con ninguno de los sectores del gobierno y arreciaron los rumores de golpe de Estado.

Para fines de 1975, a la crisis política e institucional se sumaba la económica, que comprendía la caída del PBI, la reducción de las inversiones, el desabastecimiento, la especulación y la caída del salario real. En diciembre se produjo un intento de golpe encabezado por la Fuerza Aérea. La actividad de los grupos guerrilleros,

así como la de los parapoliciales, proseguía en todo el país y los militares hacían énfasis en la incapacidad del gobierno peronista para controlarla.

La violencia se había multiplicado año a año, y afectaba a todo el territorio nacional. Más de la mitad de los actos de violencia se concentró en las grandes ciudades (29,3 por ciento en Buenos Aires, 17,1 por ciento en Córdoba y 12,5 por ciento en Santa Fe), pero el 41,1 por ciento de las acciones armadas se dio en el resto del país. Entre mayo de 1973 y abril de 1974 se produjeron 1760 hechos armados; entre mayo de 1974 y abril de 1975 fueron 2425, y entre mayo de 1975 y marzo de 1976 ascendieron a 4324. Para los mismos períodos, las muertes se distribuyeron como sigue: 754 el primer año, 608 el segundo y 1612 el tercero, con fuerte predominancia de bajas de la izquierda y el peronismo disidente (68 por ciento). A medida que fue avanzando el período, se registró mayor proporción de muertos y menor de heridos. Si entre mayo y noviembre de 1973 hubo 83,8 por ciento de heridos y 13,2 por ciento de muertos, entre octubre de 1975 y marzo de 1976 hubo 35 por ciento de heridos (entre los que predominaba el personal de seguridad) y 65 por ciento de muertos. Guerrillero capturado era guerrillero *muerto*, como parte de un *derecho del poder, más allá de la legislación vigente*.³¹

³¹ Juan Carlos Marín, *Acerca de la relación saber-poder*, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, 1978.

El aparato de seguridad pasó a estar controlado por autoridades militares y las policías quedaron en situación de dependencia operativa de las Fuerzas Armadas. A fines de noviembre, cuarenta y ocho oficiales de la Aeronáutica y la Armada participaban en el Operativo Independencia, en Tucumán. La Fuerza Aérea ganó la confianza de las otras dos, participando con acciones de bombardeo en la zona de operaciones de Tucumán. Los comandantes de cada fuerza, los jefes de Estado Mayor y los secretarios generales se reunían semanalmente y, más tarde, casi diariamente. Se formaron los Equipos de Compatibilización Interfuerzas. El aparato se preparaba para alcanzar su mayor grado de cohesión y eficiencia. En octubre, el general Videla declaraba en Montevideo: “Si es preciso, en la Argentina *deberán morir todas las personas necesarias* para lograr la paz del país”.³²

En febrero de 1976, el dirigente radical Ricardo Balbín declaraba: “No sé si el gobierno está buscando el golpe, pero está haciendo todo lo posible para que se lo den”.³³ Los partidos políticos y la sociedad civil daban como un hecho el desplazamiento del gobierno y, en realidad, con declaraciones como ésta, lo alentaban. Días antes del golpe, el general Viola se entrevistó con Balbín y con Lorenzo Miguel para anticiparles los sucesos. Desde la perspectiva de Rosendo Fraga: “Un clima de

³² En Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 237.

³³ Ricardo Balbín, en Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 225.

ansiedad parecía invadir los distintos ámbitos –contexto político, económico y social– y *empujar irreversiblemente* a las Fuerzas Armadas hacia la toma del poder”.³⁴ En verdad, las Fuerzas Armadas no necesitaban a nadie que las empujara pero, también es cierto, nadie intentó detenerlas, ni siquiera la guerrilla que estimaba que, por fin, se daría la batalla final, de la que sin duda saldría vencedora. El desgaste se aceleró y en marzo caía, sin sorpresa de nadie, este gobierno que había contado con la mayoría más aplastante de la historia electoral del país y durante el cual se habían producido 1600 muertes políticas, la mayor parte de ellas producto no de enfrentamientos sino de simples asesinatos.³⁵

³⁴ Rosendo Fraga, *op. cit.*, pp. 260-261.

³⁵ Juan Carlos Marín, *op. cit.*